



Asamblea General

Distr.
LIMITADA

A/CN.4/L.737
30 de julio de 2008

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
60º período de sesiones
Ginebra, 5 de mayo a 6 de junio y
7 de julio a 8 de agosto de 2008

**PROYECTO DE INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO
INTERNACIONAL SOBRE LA LABOR REALIZADA
EN SU 60º PERÍODO DE SESIONES**

Relatora: Sra. Paula ESCARAMEIA

CAPÍTULO X

**INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN PENAL EXTRANJERA DE
LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO**

ÍNDICE

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
A. Introducción	1	2
B. Examen del tema en el actual período de sesiones	2 - 13	2
1. Presentación del informe preliminar por el Relator Especial	3 - 13	2

A. Introducción

1. La Comisión, en su 59º período de sesiones (2007), decidió incluir en su programa de trabajo el tema "Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado" y nombró Relator Especial al Sr. Roman A. Kolodkin¹. En el mismo período de sesiones, la Comisión pidió a la Secretaría que preparara un estudio básico sobre el tema².

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

2. En el actual período de sesiones la Comisión tuvo ante sí el informe preliminar del Relator Especial (A/CN.4/601), así como un memorando de la Secretaría sobre el tema (A/CN.4/596). La Comisión examinó el informe en sus sesiones 2982ª a 2987ª, del 22 al 30 de julio de 2008.

1. Presentación del informe preliminar por el Relator Especial

3. El Relator Especial indicó que su informe preliminar tenía por objeto describir sucintamente el examen que de este tema habían hecho anteriormente la Comisión y el Instituto de Derecho Internacional y esbozar las cuestiones que la Comisión tendría que analizar al estudiar el tema y al formular posiblemente un futuro instrumento. Señaló que, desde la publicación de la sinopsis que se incluyó como anexo al informe de la Comisión correspondiente a 2006³, no había disminuido la atención prestada a la cuestión de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado: se habían publicado nuevos trabajos académicos sobre el tema y se habían adoptado varias decisiones judiciales nacionales e

¹ En su 2940ª sesión, celebrada el 20 de julio de 2007 (*Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 10* (A/62/10), párr. 376). La Asamblea General, en el párrafo 7 de su resolución 62/66, de 6 de diciembre de 2007, tomó nota de la decisión de la Comisión de incluir el tema en su programa de trabajo. El tema había sido incluido en el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión durante su 58º período de sesiones (2006), de acuerdo con la propuesta contenida en el anexo A del informe de la Comisión (*Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento N° 10* (A/61/10), párr. 257).

² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento N° 10* (A/61/10), párr. 386.

³ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento N° 10* (A/61/10), anexo A, págs. 481 a 504.

internacionales, en particular el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia en el asunto *Determinadas cuestiones relativas a la asistencia mutua en materia penal (Djibouti c. Francia)*⁴. La considerable cantidad de información disponible se había tenido en cuenta tanto en el informe preliminar como en el memorando informativo de la Secretaría, pero distaba mucho de haberse agotado. El Relator Especial subrayó que en el informe preliminar intentaba describir de manera objetiva las diferentes opiniones expresadas sobre el asunto y que ocasionalmente había dado su opinión preliminar sobre determinadas cuestiones.

4. El Relator Especial destacó que en el informe se examinaban tan sólo algunas de las cuestiones de las que la Comisión debería seguir ocupándose y que en su próximo informe pretendía tratar las restantes cuestiones preliminares: entre ellas la cuestión del alcance de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado y algunas cuestiones procesales, como la renuncia a la inmunidad.

5. Según el Relator Especial, el título mismo del tema en examen permitía determinar algunos de sus límites. La Comisión iba a examinar tan sólo la inmunidad de jurisdicción *penal extranjera* de los funcionarios del Estado, dejando así de lado cuestiones relativas a la inmunidad con respecto a los tribunales penales internacionales y los tribunales internos del Estado de la nacionalidad del funcionario, así como la inmunidad de procedimiento civil o administrativo en jurisdicciones extranjeras. Además, el tema debía centrarse en la inmunidad con respecto al derecho internacional y no a la legislación interna: las disposiciones contenidas en leyes nacionales serían únicamente pertinentes como prueba de la existencia de derecho internacional consuetudinario.

6. El Relator Especial subrayó que la cuestión de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado se planteaba en las relaciones interestatales. De conformidad con la doctrina jurídica y la jurisprudencia predominantes (y a despecho de algunas decisiones judiciales que habían justificado la inmunidad remitiéndose a la cortesía internacional), el Relator Especial consideró que había base suficiente para afirmar que la fuente de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado no era la cortesía

⁴ Fallo de 4 de junio de 2008 (para el texto en francés e inglés, véase el sitio web oficial de la Corte en <http://www.icj-cij.org>).

internacional sino ante todo el derecho internacional, en particular el derecho internacional consuetudinario.

7. El Relator Especial observó que debían distinguirse claramente los conceptos de inmunidad y jurisdicción penal, aunque estuvieran interrelacionados. La jurisdicción penal no debía limitarse a su dimensión judicial y abarcaba medidas ejecutivas adoptadas mucho antes del juicio propiamente dicho, ya que a menudo los Estados resolvían la cuestión de la inmunidad por cauces diplomáticos en la fase anterior al juicio. El Relator Especial señaló también que la jurisdicción penal no se ejercía sobre el Estado, pero que el enjuiciamiento penal de un funcionario de un Estado extranjero podía afectar a la soberanía y la seguridad de dicho Estado y constituir una injerencia en sus asuntos internos, sobre todo cuando se trataba de altos funcionarios. No consideró apropiado seguir analizando la cuestión de la jurisdicción *per se*.

8. A juicio del Relator Especial, la norma o principio jurídico de la inmunidad implicaba el derecho del Estado del funcionario y del propio funcionario a no estar sujeto a la jurisdicción y la correspondiente obligación que incumbía al Estado extranjero. Debía examinarse además si esa última obligación comprende únicamente no sólo el derecho negativo a no ejercer la jurisdicción o también la obligación positiva de adoptar medidas para impedir violaciones de la inmunidad. Asimismo, el Relator Especial consideró que la inmunidad tenía carácter procesal, y no sustantivo: si bien eximía a la persona de la jurisdicción ejecutiva y judicial, no la libraba de la jurisdicción prescriptiva, es decir, de la obligación de respetar las leyes del Estado extranjero ni de su responsabilidad penal en caso de incumplir dichas leyes. El Relator Especial observó también que, ya en esa fase del estudio, tenía la impresión de que la cuestión que se examinaba no era de hecho la de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera, sino más bien la inmunidad con respecto a determinadas medidas jurídicas del procedimiento penal o del enjuiciamiento penal. Sin embargo, añadió, esta cuestión sólo se aclararía una vez estudiado el alcance de la inmunidad.

9. El Relator Especial planteó la cuestión de si era necesario que la Comisión definiera el concepto de "inmunidad" a los efectos del presente tema. Recordó que la Comisión había rechazado esta idea en sus trabajos sobre la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. El Relator Especial observó asimismo que solía hacerse una distinción entre dos tipos de inmunidad de los funcionarios del Estado: inmunidad *ratione personae*

(o inmunidad personal) e inmunidad *ratione materiae* (o inmunidad funcional). La distinción parecía útil para el análisis, aunque ambos tipos de inmunidad tenían algunas características comunes.

10. El Relator Especial expresó la opinión de que la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado se explicaba por una combinación de "necesidad funcional" y teorías "representativas" y que su principal fundamento jurídico y político debía buscarse en los principios de la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos, así como en la necesidad de garantizar la estabilidad de las relaciones internacionales y la independencia en la realización de las actividades del Estado.

11. En cuanto al alcance del tema en lo que respecta a las personas abarcadas, el Relator Especial observó que el título se refería de manera genérica al concepto de "funcionarios del Estado". Si bien algunas veces en este contexto se había hecho referencia únicamente a los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, se reconocía en general que todos los funcionarios del Estado gozaban de inmunidad *ratione materiae*. En la práctica, los Estados afrontaban la cuestión de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera con respecto a diferentes categorías de funcionarios. Por lo tanto, el Relator Especial propuso que se mantuviera el concepto general de "funcionarios del Estado", que podría ser definido por la Comisión a los efectos del presente tema. Señaló asimismo que la Comisión debería examinar la situación jurídica tanto de los actuales como de los antiguos funcionarios.

12. En cuanto a la inmunidad *ratione personae*, el Relator Especial observó que, habida cuenta sobre todo del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de la *Orden de detención*⁵, era evidente que los jefes de Estado, los jefes de gobierno y los ministros de relaciones exteriores gozaban de este tipo de inmunidad. Con todo, quedaba abierta la cuestión de si otros altos cargos (por ejemplo, ministros de defensa, vicepresidentes de gobierno, etc.) gozaban también de inmunidad personal. Difícilmente podría resolverse esta cuestión enumerando los cargos oficiales incluidos y parecía que la Comisión debiera intentar más bien definir los criterios para determinar qué funcionarios gozaban de inmunidad personal.

⁵ *Orden de detención de 11 de abril de 2000 (La República Democrática del Congo c. Bélgica)*, fallo, I.C.J. Reports 2002, págs. 21 y 22, párr. 51.

13. Por último, el Relator Especial señaló a la atención de la Comisión dos cuestiones marginales, a saber el papel del reconocimiento en el contexto de la inmunidad y la inmunidad de los familiares de funcionarios del Estado, y sobre todo de altos funcionarios. El Relator Especial expresó la opinión de que la primera cuestión se planteaba tan sólo en casos excepcionales. No estaba seguro de que hubiera que seguir examinando ambas cuestiones.
